



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA PONENTE
ALBA LUCÍA GOYENECHE GHEVARA

Medellín, cinco de julio de dos mil veintitrés.

Radicación	05001-31-03-014-2021-00060-01
Proceso	Verbal
Demandante	Fermín Reinel Gallego Blandón
Demandado	Herederos indeterminados de Guido Castaño Villegas
Tema.	Apelación auto
Decisión.	Confirma
Rdo. interno	036-23
Providencia No.	123-23

I. ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación que interpuso el coadyuvante de la parte pasiva y apoderada judicial del poseedor de uno de los bienes inmuebles encartados, el señor William Alonso Rodríguez, actuando como personas reconocidas en el proceso, contra el auto dictado en audiencia cumplida el pasado 24 de marzo de este año por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, dentro

del proceso verbal de cumplimiento de promesa de compraventa de Fermín Reinel Gallego Blandón, contra los herederos indeterminados de Guido Castaño Villegas.

I. Antecedentes

1. Mediante el proveído que se recurre, dictado en la etapa de saneamiento dentro de la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, el Juez de conocimiento negó entre otras peticiones de la apelante, la suspensión del proceso por prejudicialidad, la integración de la litis con quienes se invocaron como litisconsortes necesarios en su calidad de acreedores hipotecarios y poseedores, la nulidad por la ausencia de traslado de las excepciones propuestas por la vinculada Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo, y el decreto de pruebas solicitadas por ésta y el otro poseedor reconocido en el proceso, a quien se le negaron las testimoniales solicitadas.

2. En particular, en punto de las personas que debían ser citadas al proceso de cumplimiento de contrato, señaló la coadyuvante: al señor Kennier Andrés Sepúlveda como acreedor hipotecario visto en la anotación No. 4 del folio de matrícula inmobiliaria 01249467; al señor Alejandro Duque Gómez quien es arrendatario demandado en proceso de restitución de bien inmueble arrendado ante el Juzgado 21 Promiscuo Municipal de Copacabana, pues alega también calidad de poseedor; al señor Jhon Fernando Tobón Carmona quien también tuvo una hipoteca y su ampliación según las anotaciones 5 y 8 del folio de matrícula inmobiliaria 01238110, no obstante haber sido cancelada ya por la acá impugnante, considera que esta persona tuvo derechos reales por los que cree que debe comparecer al proceso; el señor Tobón también figura como acreedor hipotecario sobre

el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 01250494, y debe llamarse también a la Alcaldía de Medellín pues cursa un embargo por impuestos respecto del inmueble 001605219, entre otros.

3. El juez negó la necesidad de citación de estas personas y las demás solicitudes bajo los argumentos señalados en la audiencia. Para arribar a tales decisiones tuvo en cuenta el *a quo*, en primer lugar que la figura de la prejudicialidad implica al tenor de lo reglado por el artículo 161 del Código General del Proceso, que la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial, lo cual no es el caso en el presente asunto y además, que la suspensión en caso de ser procedente solo puede decretarse en la oportunidad también prevista por el artículo 162 siguiente, esto es en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia.

4. Negó igualmente la conformación del litisconsorcio con quienes se adujeron por la demandada como litisconsortes necesarios, por carecer tanto los acreedores hipotecarios como los presuntos poseedores de tal calidad, es decir, frente a la finalidad del proceso que no es otra que la declaratoria del cumplimiento de lo prometido en venta, no hay lugar sino a la intervención de las partes de dicho contrato y ninguna otra persona.

5. Frente a la negativa del decreto de pruebas, dijo el *a quo* que la misma se encontraba motivada en el auto que así lo dispuso y por ello debió la impugnante hacer uso del correspondiente recurso en la debida oportunidad que no es otra que en la notificación del auto, y no hasta la audiencia proponerlo como eventual nulidad procesal.

6. Por último, negó la presunta irregularidad en el trámite de las

excepciones pues comprobó a la quejosa que conforme al expediente digital obra en el archivo No.30 del encuadernamiento principal, el correspondiente traslado de las propuestas.

7. Contra estas decisiones opuso la parte demandada coadyuvante, recurso de apelación, insistiendo en que la suspensión del proceso sí es viable en el estado en que se encuentra, los litisconsortes son necesarios por estar frente a “derechos reales” que éstos tienen en relación con los inmuebles objeto de promesa, y que invocó el numeral 8 del artículo 133, que previene la apelabilidad del auto que niega la vinculación de estos terceros, ya que incluso tienen ellos derechos inscritos sobre algunos de los inmuebles objeto del proceso. Apeló igualmente la falta del traslado de las excepciones y en virtud del numeral 3 del artículo 321 impugnó ante esta segunda instancia el auto que no le decretó las pruebas solicitadas y denegó parcialmente las pedidas por el demandado William Rodríguez, en tanto no decretó las testimoniales manifestadas.

8. El juzgado 14 Civil del Circuito de Oralidad en la misma audiencia concedió el recurso de segundo grado en el efecto devolutivo.

IV. Consideraciones

1. Dice el artículo 320 del Código General del Proceso que *“el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.*

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

A su vez, esta última norma reza lo siguiente respecto de la coadyuvancia: “El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.”

2. El artículo 321 siguiente, en relación con los autos apelables, señala los que son susceptibles de este recurso:

1. “El que rechaza la demanda, su reforma o la contestación de cualquiera de ellas.
2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.
3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.
5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.
6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.
7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.
9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.
10. Los demás expresamente señalados en este Código.” (subraya el Despacho)

El artículo 322 del Estatuto Procesal General se ocupa de regular lo concerniente a la oportunidad y los requisitos del mencionado recurso.

Como se puede notar, característica esencial del recurso objeto de análisis sigue siendo la taxatividad, pues salvo los casos señalados en el artículo 321 los restantes autos no admiten recurso de apelación. Siendo ello así, no es dable a esta Corporación admitir el recurso de apelación respecto de providencias que no lo tienen previsto, sobre la base de que son parecidas o con efectos similares a otras donde si está permitido, por cuanto el criterio de taxatividad impide este tipo de interpretación.

En el caso bajo estudio, la parte demandada, que en puridad es coadyuvante de los herederos del demandado, formuló recurso de apelación contra el auto mediante el cual el juzgado negó la prejudicialidad propuesta, asunto que no se encuentra dentro del listado del artículo 321 ya citado. Tampoco lo autoriza el artículo 161 y siguientes de la ley procesal general que regula lo concerniente a la procedencia de la suspensión del proceso cuando existe otro proceso que necesariamente se encuentra relacionado sobre la cuestión debatida. Es así como, si bien el recurso fue interpuesto dentro del término legal, por persona legitimada para recurrir y con interés jurídico, se trata de una decisión inapelable.

Y no se diga que lo es, tampoco bajo la invocación del artículo 133 *ejusdem* que en su numeral 3 contempla la nulidad cuando el proceso se adelanta después de ocurrida una de las causales de interrupción o de suspensión, pues lo que el juez resolvió en la audiencia no fue petición de nulidad en este sentido, sino la petición de suspensión presentada mediante memorial al juzgado en fecha anterior a la audiencia.

Lo mismo debe decirse de la decisión dictada en audiencia que negó la nulidad por falta de traslado de las excepciones propuestas por la coadyuvante demandada, pues éste, como es sabido, no es pasible de

alzada.

En su lugar, para este Despacho sí lo es, la decisión que negó la nulidad por falta de citación de quienes debieron ser llamados al proceso como litisconsortes necesarios en virtud de lo normado por el numeral 8 del artículo 133 del Código General del proceso y la decisión que negó el decreto de las pruebas solicitadas de una coadyuvante y la negativa de las testimoniales solicitadas por el otro, lo que pasa a resolverse seguidamente, sustentado como se encuentra desde la primera instancia, el motivo de apelación.

Fundada en la negativa de traer a los presuntos litisconsortes, itérase, -acreedores hipotecarios y eventuales poseedores de los bienes inmuebles objeto de promesa de compraventa-, en la carencia de una relación sustancial con cualquiera de las partes, este Despacho confirmará la decisión pues en efecto, se está ante una demanda de cumplimiento del contrato de promesa de compraventa entre el promitente comprador y los herederos de quien suscribiera aquella convención, lo que excluye cualquier otro interviniente que por lo demás, conservará los derechos que pretenda hacer valer frente al comprador o frente a quien corresponda. La actual es una controversia bilateral, contractual sobre la cual se dispondrá en la decisión de fondo del proceso y no admite la comparecencia, al menos como partes, de quienes aun cuando puedan resultar afectados con la sentencia, tienen los mecanismos para oponerse frente a quien demuestre la propiedad o la posesión o un mejor derecho sobre los bienes inmuebles.

Luego, en este punto se confirmará lo decidido por el *a quo*.

3. Frente a la apelación de la nulidad propuesta en contra del auto

de pruebas que data del 15 de diciembre de 2022, en el que según la censora se desconocieron las pruebas pedidas por ella y se negaron las testimoniales solicitadas por el coadyuvante demandado William Alonso Rodríguez, dijo el juzgado que en todo caso en la decisión se consignó la razón de aquella negativa y pudo la impugnante recurrir la decisión, lo cual no hizo.

Basta este solo argumento para confirmar la decisión, pues en efecto la censora tuvo la oportunidad de oponerse oportunamente a la negativa del decreto de pruebas mediante recurso, no habiéndolo hecho en el término legal, lo que conduce al saneamiento de la eventual nulidad propuesta en la audiencia, pues entonces la inconforme actuó sin proponerla como se dijo, tempestivamente. Lo anterior, conforme al tenor de lo reglado por el numeral 1 del artículo 136 del Código General del Proceso. Se confirmará, en consecuencia, también esta decisión de audiencia.

De conformidad con el análisis normativo que antecede, se declarará improcedente el recurso de apelación en contra de las decisiones de la suspensión por prejudicialidad y la falta de traslado de las excepciones y se confirmarán las decisiones del *a quo* en relación con la improcedencia del llamamiento a los presuntos litisconsortes enunciados por la pasiva, y la negativa de la nulidad frente al auto de pruebas en el proceso.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

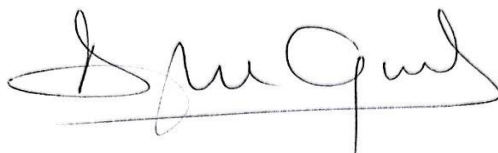
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR **inadmisible** el recurso de apelación concedido por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, que interpuso la parte coadyuvante en contra del auto proferido en audiencia de fecha 24 de marzo de 2023, referente a la suspensión por prejudicialidad y la falta de traslado de las excepciones propuestas por la parte coadyuvante.

SEGUNDO: CONFIRMAR las decisiones referidas a la negativa de conformación del litigio con los litisconsortes enunciados por la coadyuvante de la pasiva y la ausencia de nulidad frente a las pruebas denegadas.

TERCERO: Sin costas, por no aparecer causadas.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE.



ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA
Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley

2213 de 2022